

POR JOSÉ MARÍA MARCO

EL GOBIERNO LARGO

La democratización del liberalismo



Cuando Antonio Maura llegó a la Presidencia del Gobierno el 25 de enero de 1907, ya llevaba muchos años en política. Había nacido en Palma de Mallorca el 2 de mayo de 1853, en una familia de industriales que vivían en el mismo puerto de la ciudad. Sus estudios universitarios en Madrid coincidieron con los años revolucionarios de entre 1868 y 1874. Así conoció de cerca el experimento democrático, además de cursar en pocos años la carrera de Derecho. El Derecho sería, en buena medida, la brújula de toda su vida. En la Universidad entró en contacto con los hermanos Gamazo y poco después se casó con Constanza. Germán Gamazo introdujo a su cuñado en el Partido Liberal, donde había formado un grupo propio que defendía los intereses de los cerealistas castellanos.

La fuerte personalidad de Maura destacó pronto y en 1892 ya era ministro de Ultramar en el Gobierno de Sagasta. Desde allí promocionó una política de autonomía para Cuba y realizó, desde muy diversas tribunas, rigurosas advertencias acerca del lamentable estado de la Armada, que dejaba a España indefensa en la época de la gran expansión imperialista occidental. La autonomía para Cuba fue desechada por Sagasta y nadie le hizo caso en lo segundo. Maura, con el grupo de Gamazo, acabó ingresando en el Partido Conservador en 1902 y ocupó una nueva cartera, la de Gobernación ese mismo año, con Francisco Silvela, heredero del liderazgo de Cánovas, a la cabeza.

El momento era particularmente delicado. Como todos los países europeos, España vivió la crisis general de los regímenes liberales, con la gran mutación de fin de siglo, de forma dramática, con las derrotas de 1898 en Cuba y Filipinas, el final del imperio, la llegada al trono de un nuevo monarca, el joven Alfonso XIII, y el final del liderazgo tradicional de los partidos de la monarquía constitucional tras el asesinato de Cánovas (1897) y el fallecimiento de Sagasta (1903).

La gran crisis, en la que muchas cosas estaban por reinventar, ofrecía una oportunidad extraordinaria a un hombre como Maura que, desde muy joven despuntó por su extraordinaria fuerza de voluntad, su visión estratégica («Va para Cánovas», se comentó pronto), su patriotismo y la extraordinaria claridad moral, rara en tiempos sumamente confusos. Maura absorbió la retórica catastrofista y apocalíptica del regeneracionismo, pero le dio un giro particular. Por ahora, nos quedaremos con su fabulosa capacidad para la fórmula rotunda, a veces hiriente, muchas veces insolente y siempre definitiva. Son inolvidables —y se recordarían más si los políticos y la sociedad española tuvieran un mayor sentido de la historia nacional—, la «revolución desde arriba», el «descuaje del caciquismo», la «incompatibilidad con las digestiones sosegadas» o el celeberrimo «Nosotros somos nosotros» con el que contestó a una campaña que le acusaba falsamente de corrupción.

En realidad, había llegado el momento de iniciar en serio la democratización del liberalismo y Maura, bien consciente del momento crucial en el que llegaba a la política, comprendió que el conservadurismo le ofrecía un campo más sólido para llevar a cabo su proyecto. Los liberales le reprocharon su traición y en las filas de su nuevo partido algunos tardaron en fiarse de este *neoconservador* que no había renunciado a su liberalismo. Su fidelidad liberal se manifestaría en dos campos: la lealtad a la monarquía constitucional, con el principio de la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, y el respeto a los principios de libertad individual, que le llevaron a expresar su poco aprecio por las unanimidades.

La democratización era una exigencia de autenticidad, y de ahí el tono y la retórica regeneracionistas. Ahora bien, la democratización era una cuestión esencialmente política y se manifestaba en el concepto clave de su pensamiento político, que es el de ciudadanía: si se quería que el régimen liberal sobreviviera había que democratizarlo y para eso había que formar ciudadanos, capaces de entender que su destino personal está ligado sin remedio al de su nación y del que deben ser conscientes.

ECONOMÍA, COSTUMBRES Y CULTURA

El liderazgo le llegó, un poco paradójicamente, de la mano de Francisco Silvela, el más culto, el más sofisticado y el más pesimista de los políticos de la época. Así es como formó gobierno en 1904, habiendo vuelto a ser ministro (esta vez de Gobernación) en 1902. Desde esta posición, organizó en 1903, unas famosas elecciones, de las más limpias y competitivas que era posible celebrar entonces. Le ganaron la desconfianza de una parte del régimen. Salió en 1904 sin haber podido cumplir sus proyectos, pero volvió, como ya hemos

visto, tres años después. Así daba comienzo el «Gobierno largo», así llamado por su estabilidad -cerca de tres años- inusual en las costumbres de la época.

Todavía hoy sorprende la capacidad de trabajo de aquel equipo al que se incorporaron Juan de la Cierva, Guillermo de Osma y Eduardo Dato. En total, 264 medidas legislativas. Una de las primeras fue, como era de esperar, la que reformó la ley electoral y empezó a despejar las prácticas propias de la época del liberalismo, con elecciones decididas y pactadas de antemano en el despacho del Ministerio de Gobernación y la negociación entre autoridades y caciques locales. Maura y los legisladores, porque la ley fue muy ampliamente respaldada, consiguieron cierto grado de limpieza. Sin embargo, como no se emprendieron las reformas necesarias, en particular la creación de un gran partido de masas capaz de movilizar a la ciudadanía, los resultados, en cuanto al objetivo del «descuaje del caciquismo», fueron limitados. Maura no lograría resolver la contradicción entre su proyecto de formación de la ciudadanía y el de la «revolución desde arriba». Aun así, el intento fue serio, y de fondo.

Un gran éxito de Maura lo constituyen las medidas económicas, en las que Juan Velarde vio el principio de lo que llamó *populismo económico*. Había quedado atrás el conjunto de reglas del librecomercio global y con el gobierno de Maura y su ministro Guillermo de Osma se pasó del proteccionismo de Gamazo a una política de intervención activa, como en la famosa ley de 3 de agosto de 1907 que prohibió -algo nunca visto hasta entonces en una sociedad tan profundamente liberal como la española de entonces- durante tres años el establecimiento de fábricas de azúcar. Cuando preguntaron a Maura sobre su fidelidad al librecomercio, preguntó, a su vez, dónde estaba este.

Maura puso esta política de nacionalización económica al servicio de su antiguo proyecto de reconstrucción de la Armada española. En un momento en el que el poder en el mar era fundamental para la proyección política de los países occidentales, y estando convencido Maura de que España es un país marítimo por naturaleza, había llegado el momento de poner en marcha una política en la que la cuestión exterior iba unida a la modernización y a la prosperidad internas. Como siempre en Maura, el proyecto arrancó con la gran sesión parlamentaria del 27 de noviembre de 1907, la llamada Sesión Patriótica, con la que se puso en marcha una acción que haría de la Armada española una de las más poderosas del mundo, hasta que la Guerra Civil arruinó todo lo hecho. El proyecto le costó a Maura acusaciones de corrupción, así como enfrentarse a buena parte del regeneracionismo que abogaba por la abstención exterior y el regreso al interior, como en el famoso «¡Adentro!» de Unamuno o la consigna de las «Siete llaves al sepulcro del Cid» preconizadas por un Costa alucinado y desorbitado.

Más relevantes de lo que tantas veces se ha dicho fueron las medidas de moralización pública (control de horarios de los establecimientos de espectáculos y restauración, respeto del descanso dominical, regulación de la prostitución, licencia de armas) y la preocupación por la higiene y la salud pública, un motivo regeneracionista por esencia, que multiplicó por diez el gasto presupuestario en Sanidad. En cuanto a las primeras, Maura y su ministro Juan de la Cierva daban respuesta a esa sensación de *degeneración* y corrupción en las costumbres que tanto denunciaron los artistas e intelectuales de la época, con la única intención de elevar a los altares su propio nihilismo estético. Ni qué decir tiene que en el ambiente radicalmente liberal de las ciudades de la época, las medidas de Maura, tan características de su carácter y de su tiempo, no le ganaron gran popularidad. Las otras, las de higiene y sanidad, deben encuadrarse en la nueva política social que estaban llevando a cabo los conservadores, conscientes, mucho antes de la izquierda liberal, que las nuevas condiciones sociales de urbanización masiva e industrialización -el desafío planeado por una modernización acelerada- requerían instrumentos de prevención y corrección que sólo el Estado podía suministrar.

Era un ambiente extendido en el conservadurismo, con una elite de grandes figuras preocupadas por las cuestiones sociales, como el vizconde de Eza o el marqués de Camarines, y un catolicismo cada vez más volcado en la acción social y, dentro del Gobierno, con figuras como Eduardo Dato y el propio Juan de la Cierva. Así es como el gabinete Maura fundó la sección española de la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores, la promulgación de la Ley de Protección de la Infancia, la legislación contra la usura, el control de los pagos a los trabajadores, el control del trabajo de mujeres y niños, el de

la emigración, leyes orientadas a la revinculación de los campesinos con la tierra y a la reorganización de antiguos sistemas de asociación cooperativa, como los pósitos. El gran impulso social se plasma en la creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908, pionero de la futura Seguridad Social, la ley de establecimiento de los Consejos de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Industriales y la primera Ley de Huelgas en 1909. Y también en la colaboración con el Instituto de Reforma Social y su director, Gumersindo de Azcárate, fundado por otro gobierno conservador en 1903.

La intensa conciencia de cambio que traducen las palabras y las políticas de Antonio Maura está detrás de uno de los aspectos más olvidados de su gestión, como es la cultura. Todavía por entonces primaba en este terreno -salvo en cuanto a algunas grandes instituciones, como los museos nacionales o el Teatro Real de Madrid- una política de abstención casi total en beneficio de la libertad de acción de particulares y propietarios. Es Maura quien empieza a sentar las bases de una nueva responsabilidad del Estado en la conservación y el incremento del patrimonio cultural, con ideas, que se irán abriendo paso a partir de ahí, como la prohibición de exportación de obras de arte o la preservación de espacios naturales. Se puede hablar, como ha hecho Alfredo Pérez de Armiñán en una reciente conferencia, de «regeneracionismo cultural», protagonizado por Maura y por personajes como su amigo Guillermo de Osma o el marqués de la Vega-Inclán. El impulso tendría largo alcance, con la promulgación de la Ley de Parques Nacionales, en diciembre de 1916, pionera en su género, por un Gobierno conservador presidido por Eduardo Dato y poco después, en 1918, con la declaración del primer Parque Nacional, el de la Montaña de Covadonga, también pionero. Encontramos aquí, por primera vez, el núcleo del diseño de una política cultural inspirada por la urgencia de poner en valor el significado nacional del legado recibido. Con Maura, este designio se manifestará en el establecimiento (en un gobierno posterior, el de 1918) del 12 de octubre como Fiesta Nacional. En 1909 el Gobierno de Maura creó el Teatro Español, destinado a poner en escena dignamente el patrimonio dramático español. El gobierno de Maura también estableció la obligación de colocar la bandera nacional en los edificios públicos durante los días de fiesta nacional, en respuesta a los actos de los nacionalistas. Conmemoró el I centenario de la Guerra de la Independencia y de los héroes del Sitio de Zaragoza, declaró la catedral de Toledo monumento nacional en 1908 y celebró el XII centenario de la batalla de Covadonga. Y fue el Gobierno de Maura el que fijó la Marcha Real como himno nacional. Maura y su Gobierno sabían muy bien lo que valían los símbolos.

REPRESIÓN DEL TERRORISMO

En este formidable despliegue de energía, el primer gran fracaso llegó con la nueva legislación sobre terrorismo. Como es bien sabido, uno de los síntomas más claros de la crisis de fin de siglo, en toda Europa, fueron los atentados terroristas, a cargo casi siempre de anarquistas, embarcados en un proyecto de revolución mediante la violencia pura, sin sentido. El Estado liberal estaba mal equipado para un ataque como este, y aún más el español, con escasas inversiones en seguridad urbana, por lo que recurría a instrumentos, como el Ejército o la Guardia Civil, que no estaban preparados para ello. Maura, víctima él mismo de un atentado terrorista en Barcelona en 1904, presentó en el Senado una ley de represión del terrorismo que, aunque excluía el recurso a la jurisdicción militar -promovida por el gobierno liberal de Segismundo Moret en 1906-, preveía la prohibición de manifestaciones y la publicación de noticias sobre terrorismo. También se podía establecer juntas territoriales autorizadas para cerrar centros, periódicos e incluso expulsar a personas del país. Además de entender que la gravedad de la situación justificaba medidas como estas, Maura pensaba que el terrorismo anarquista constituía una novedad ya que sus ideas constituían de por sí una incitación a la violencia. Entre la formulación del concepto y la violencia política no había nada. Así intentó Maura justificar la dureza de la ley.

La oposición de republicanos y socialistas estaba asegurada. Pablo Iglesias, que -como ha explicado Juan Avilés- encontró en la ley un pretexto para equiparar la monarquía constitucional española con la autocracia rusa, declaró: «Seremos terroristas». Sobre todo, se opuso buena parte de la prensa, que vio en la Ley un instrumento para imponer la censura previa y obligarle a publicar la versión oficial de la

actualidad. La reunión de casi todos los directores de diarios madrileños marcó el inicio, con un «comité de defensa», de la campaña de oposición al proyecto.

El *Trust*, como fue conocido, lanzó su primera campaña contra Maura a comienzos de 1907. En un momento en que los periódicos estaban en pleno cambio, precisamente por la democratización de los sistemas políticos y los adelantos técnicos que permitían tiradas hasta ahí impensables, el enfrentamiento con Maura garantizaba un gran espectáculo. El proyecto de evitar la promulgación de la Ley antiterrorista fue asumido como un objetivo irrenunciable. Fue aquí donde nació el eslogan del «¡Maura, no!». Plasmaba el sentido de una campaña que podía haberse limitado a una cuestión general, de orden político. La novedad es que hacía de su protagonista en una caricatura. Maura se convertía definitivamente en el figurón reaccionario, ultramontano, clerical, represor hasta la brutalidad... también corrupto, por los escándalos suscitados por las obras del Canal de Isabel II y las concesiones hechas a las empresas encargadas de las construcciones previstas en la Ley de la Escuadra.

El 9 de mayo de 1908 la Ley Antiterrorista fue aprobada en el Senado. La presión de los periódicos, sin embargo, creció y viendo que se echaba encima el verano y la ley de Administración Local –el gran proyecto de su legislatura– se atascaba en el Congreso, Maura, por fin, decidió retirar la ley contra el terrorismo. Fue el principio del llamado Bloque de Izquierdas.

LA LEY DEL «DESCUAJE DEL CACIQUISMO»

Maura no parece haber dado demasiada importancia al fracaso de la ley contra el terrorismo. Muy distinto era el proyecto de la Ley de Administración Local. Era este, como es bien sabido, el eje de la política de «descuaje del caciquismo» preconizada por Maura desde mucho antes de su llegada al Gobierno. Era una ley larga y prolija, de 409 artículos. Cambó le dijo que podía haber presentado una ley más breve, de tramitación más sencilla y efectos más rápidos. Maura se atuvo a su proyecto, que cubría todos y cada uno de los aspectos de la vida municipal. Maura, muy del siglo XIX todavía, tenía una fe religiosa en el poder taumatúrgico del Derecho.

Además, como siempre en su estrategia política, el impulso reformista y el debate parlamentario y ante la opinión pública conforman las dos vertientes de una política encaminada a formar y educar a la ciudadanía. Maura había sido el único político en activo en participar en la famosa encuesta sobre *oligarquía y caciquismo* promovida por Costa en 1901. A diferencia de una opinión generalizada, pensaba que el caciquismo podía ser erradicado con la implantación de la democracia y atacando el núcleo del problema, que en su pensamiento se situaba a escala municipal. Había que renovar este a fondo para revitalizar la vida local y crear así las condiciones para que el individuo comprendiera el lazo que le une con el bien común: hacer de él un ciudadano.

A diferencia del centralismo liberal -y canovista-, que hacía del Estado la principal vía de reforma y -según el propio Cánovas- de civilización y de libertad, Maura, como Burke y Tocqueville, concebía el municipio como uno de esos núcleos espontáneos y orgánicos que garantizan la vida de una sociedad. De hecho, la descentralización y la desamortización habrían desvitalizado el municipio y permitido su asalto por el caciquismo. Se trataba ahora de revertir el proceso otorgando a los municipios una personalidad política propia que impediría la intervención de instancias exteriores en los procesos electorales. Una nueva personalidad jurídica ampliaba sus capacidades en materias reservadas hasta entonces al gobierno, y se les cederían competencias en seguridad, obras públicas, sanidad y enseñanza. También se abría el recurso al referéndum y al «concejo abierto», una recreación de la democracia antigua que encandilaba a los organicistas municipalistas como Azcárate. Y, lo que resultaba más dudoso para la ortodoxia liberal -en particular a la hora de enfrentarse al caciquismo-, un tercio de los concejales se elegirían por sufragio corporativo.

Los municipios tendrían también la posibilidad de mancomunarse. Era, además de un proyecto característico de quien había preconizado la descentralización para afrontar el problema cubano, una forma de atraerse a Cambó, cuyo aterrizaje en las Cortes había constituido uno de los acontecimientos mayores de la temporada política de 1907. Cambó se presentó como el enviado de una civilización

superior dispuesto con la mejor voluntad del mundo a remediar los males de una España enferma y degenerada. Y Maura, que con frecuencia da muestras de una notable ingenuidad, lo adoptó como su aliado. Estaba convencido, sin duda alguna sinceramente, de que el nacionalismo catalán era una palanca para la modernización y la democratización del país. Como sabemos, no fue ni sería el único en caer en esta trampa.

EL FINAL DEL GOBIERNO LARGO Y LA NEUTRALIZACIÓN DE MAURA

De salir adelante la ley de Maura, los liberales se enfrentarían a una larga travesía del desierto, por la hegemonía más que probable del conservadurismo, y por la necesidad de adaptar el partido de notables a una situación que empezaba a ser democrática. (También habrían de hacerlo los conservadores, pero desde otra perspectiva, más ventajosa). Así que pronto se abrió paso la tentación de una oposición radical. Los republicanos no lo habían dudado, pero los liberales, con el veterano Segismundo Moret al frente, tardaron algún tiempo en adoptar una actitud en contra. En realidad, ya habían ensayado la nueva actitud durante la campaña contra la Ley de Represión del Terrorismo, con el «¡Maura. No!» y la creación del Trust, que ya conocemos. También aquí Maura demostró una ingenuidad sorprendente, que le llevó a no valorar en su justa medida el peso de la opinión pública en la nueva circunstancia política.

El mes de julio de 1909 las tropas españolas sufrieron varias derrotas a cargo de la guerrilla rifeña. Maura sentía aversión por las «aventuras marroquíes», pero sabía de la necesidad de que España estuviera presente en la zona para salvaguardar los intereses estratégicos y la defensa del país. No dio demasiada importancia a los hechos de julio y se marchó de vacaciones a Santander, como solía hacer. Mientras tanto, el general Linares, ministro de la Guerra decidió movilizar un contingente de reservistas y enviarlos a Marruecos desde Barcelona, centro de la rebelión anarquista. Así se llega a los sucesos de la Semana Trágica, entre julio y agosto de 1909, con más de un centenar de muertos y la destrucción sistemática de edificios religiosos.

Lo ocurrido a partir de ahí es bien conocido: represión, proceso del pedagogo y terrorista Ferrer Guardia, su injusta condena a muerte y la monumental campaña exterior a favor del anarquista. Maura pareció en todo momento seguro de su acción y no dio el menor indicio de debilidad, saliendo a debatir en el Parlamento, como era su costumbre, hasta los asuntos más polémicos. Confiaba, al parecer plenamente, en los equilibrios tradicionales que le permitirían proseguir en el poder si no variaba la relación de fuerzas en las Cortes. Sin embargo, ya se había formado una nueva coalición, el Bloque de Izquierdas, que renovaba la anterior del «¡Maura, no!». En la nueva coalición, el Bloque de Izquierdas, participó un conjunto de fuerzas muy variado: el Partido Liberal, republicanos, socialistas y la Institución Libre de Enseñanza, que consideraba que el Gobierno de Maura era la encarnación misma de «la pedantería, la procacidad y la ignorancia». Todos apoyados por la prensa del Trust que, como apuntó Carlos Seco Serrano, aparece ahora como el predecesor del Bloque. En vez de integrar a los radicales, los liberales, es decir la izquierda, se radicalizaba. Ahora el objetivo era acabar con el Gobierno de Maura mediante una campaña en la opinión pública que consiguiera inclinar la voluntad del rey Alfonso XIII para retirar su confianza a don Antonio. Lo consiguió el 21 de octubre de 1909, lo que provocó el final del proyecto de Ley de Administración Local, la mayor acción legislativa emprendida jamás para acabar con el caciquismo.

La gran maniobra logró bloquear el primer -y único- intento serio de democratizar el régimen liberal de la Monarquía constitucional. Lo bloqueó hasta el punto de que nadie, fuera de los círculos de los especialistas, sabe que fueron los conservadores los que intentaron por primera vez esa democratización. De aquellos años, quedó en cambio el arranque de una nueva izquierda, distinta de la del régimen liberal. Era una combinación de los herederos del experimento revolucionario del Sexenio -con la Institución Libre de Enseñanza a la cabeza-, parte del Partido Liberal, republicanos y socialistas. Sería la base de la destructiva izquierda española de los siglos XX y XXI.

BIBLIOGRAFÍA

- González, María Jesús: *El universo conservador de Antonio Maura*. Madrid, Biblioteca Nueva, 1997.
- Marco, José María: *Maura. La política pura*, Madrid, Gota a Gota, 2013.
- Pérez de Armiñán, Alfredo: «Antonio Maura y Guillermo Joaquín de Osma: la visión conservadora del patrimonio histórico y artístico español, entre el conservadurismo ilustrado y el regeneracionismo», inédito.
- Sevilla Andrés, Diego: *Antonio Maura. La revolución desde arriba*. Madrid, Congreso de los Diputados, 2009.
- Silió, César: *Maura*. Madrid, Espasa-Calpe, 1934.
- Tusell, Javier: *Antonio Maura. Una biografía política*. Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- VV. AA.: *Antonio Maura, en el centenario del «Gobierno largo»*. Benigno Pendás coord., Madrid, FAES, 2009.



Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura